

Notas del mes

Misión de la Universidad (según el Ministerio)

Por José A. Estévez Araújo

Cuestiones boloñesas

Por Albert Recio Andreu

Cuaderno de crisis / 5

Por Albert Recio Andreu

Crisis y corrupción en EADS

Por Pere Ortega

¿Por qué ahora ellos?

Por Josep Torrell

La Biblioteca de Babel

El espejismo nuclear. Por qué la energía nuclear no es la solución, sino parte del problema

Marcel Coderch y Núria Almiron

La actualidad de China. Un mundo en crisis, una sociedad en gestación

Rafael Poch-de-Feliu

Todo fluye

Vasili Grossman

El país del miedo

Isaac Rosa

Foro de webs

Proceso de Bolonia⁴

Misión de la Universidad (según el Ministerio)

José A. Estévez Araújo

Los estudiantes que protestan contra el llamado “Proceso de Bolonia” llevan razón en sus vaticinios. Hay un documento oficial que lo demuestra bien a las claras: la “Estrategia Universidad 2015”, que puede encontrarse en la página web del Ministerio de Ciencia e Innovación:

http://universidades2015.fecyt.es/documentos/estrategia_universidad_2015_univ.pdf

En él se señalan con meridiana claridad cuáles son los objetivos que se pretenden alcanzar con las reformas universitarias actualmente en curso.

La vinculación de este plan estratégico con el proceso de Bolonia se pone de manifiesto expresamente en el texto, cuando se dice que “la Estrategia Universidad 2015 tiene como punto de partida el pleno desarrollo del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) en España.” Y que no se trata de algo exclusivamente español, lo subrayan las múltiples referencias a la estrategia de Lisboa. Dicha estrategia fue adoptada por el Consejo Europeo en el año 2000. En ella se establece el objetivo de que la UE se convierta en la zona económica más competitiva del mundo. La universidad debe ponerse al servicio de esa meta incrementando la competitividad de las empresas europeas.

En línea con la finalidad de la estrategia de Lisboa, el documento ministerial español asigna una nueva misión a la universidad: la transferencia de conocimiento. Esta “misión” se añade a las dos que, según el documento, las universidades han tenido tradicionalmente: la investigación y la docencia.

¿En qué consiste la transferencia de conocimiento? La Estrategia Universidad 2015 lo deja bien claro: “El conocimiento es un capital pero es necesario identificar en él lo que realmente tiene valor para el mercado en cada momento y eso es lo que es transferible”. Es decir, el conocimiento que “realmente tiene valor” es el que tiene aplicaciones mercantiles. Ese es el que hay que “transferir”. ¿A quién? A las empresas, naturalmente: “Es una prioridad de este Gobierno, dice el documento, el establecer mecanismos que faciliten la transferencia entre el conocimiento generado en nuestros centros públicos de investigación y las empresas.” Y esa prioridad sigue, por supuesto, las directrices de la UE: “La Unión Europea, en la reciente recomendación de la Comisión C(2008)1329 de 10.04.2008 insiste en que la transferencia de conocimiento es una herramienta esencial en el desarrollo de la estrategia de Lisboa”.

En el documento ministerial no se plantean en ningún momento otras formas de difusión social del conocimiento generado por la universidad. Uno de esos mecanismos alternativos serían las llamadas *science shops*: grupos de investigación universitarios que realizan trabajos para satisfacer demandas de ONGs o de movimientos sociales. Para el ministerio, los únicos beneficiarios posibles son las empresas y el único conocimiento que realmente cuenta es el que tiene valor de mercado. Si yo investigo para una ONG cuáles pueden ser los mejores instrumentos de cara a que los inmigrantes se integren en su país de acogida, ni mi conocimiento es “realmente útil” (ya que no cobro por transmitirlo) ni difundirlo es una forma de “transferencia.”

Curiosamente, aunque la visión de lo que es realmente útil está bien clara en el documento, en él se afirma textualmente que “la necesidad de acelerar la transferencia de conocimiento generado por el sistema público de investigación y las universidades, no es una forma de alcanzar mayores beneficios por parte del sistema productivo”.

Un “mantra” que se repite constantemente en el texto, junto con el de la “competitividad”, es el de la “excelencia” (la palabreja aparece 46 veces en el documento). La búsqueda de la “excelencia” se puede poner en relación con la que Ortega consideraba como la tercera función fundamental de la universidad: no se trataba de transferir conocimiento, sino de enseñar a mandar. O, como señalaba Manuel Sacristán en “La Universidad y la división del trabajo”, ser un mecanismo de establecimiento y consolidación de las jerarquías asociadas a la división social del trabajo.

La búsqueda de la excelencia consiste en concentrar los recursos en la selección, fichaje y promoción de una reducida élite de los considerados más capaces (estudiantes y profesores). Así, en lugar de favorecer su potencial democratizador, se pretende volver a convertir a la universidad en un mecanismo de jerarquización, como lo ha sido tradicionalmente. Sólo que en lugar de establecer una distinción entre titulados y no titulados, se creará una jerarquía entre universidades de élite con titulados de élite y el resto de universidades con el resto de titulados.

El modelo de financiación que se prefigura en el documento ministerial tiende a premiar esa “excelencia”. Es decir, que en vez de ayudar a quienes están peor, se subvencionará a los que están mejor. Y la excelencia se medirá sobre todo por la capacidad de generar conocimiento que tenga valor de mercado. El nuevo modelo de financiación deberá facilitar la especialización en los ámbitos de investigación competitiva y transferencia de conocimiento. Y a los más capaces se les premiará con la posibilidad de participar en la explotación comercial de sus descubrimientos.

La Estrategia Universidad 2015 habla de otras muchas cosas. De becas (poco), de movilidad, de internacionalización, de Rankings universitarios, de la docencia (cuyo objetivo es la “formación de emprendedores”), del personal administrativo y de servicios, de los estudiantes (a quienes se trata como clientes, más que como ciudadanos), de la “gobernanza” (¡cómo no!), de la gestión... La filosofía que preside el tratamiento de todos esos temas es la misma: buscar la excelencia y promover la competitividad. Por eso, quien quiera buscar buenos argumentos para ponerse del lado de los estudiantes en esta lucha, no tiene más que leer ese documento. Los encontrará en abundancia.

4/2009

Albert Recio Andreu

Hace meses que el debate sobre *la reforma de Bolonia* me provoca malestar, por la sensación de que en él predomina la confusión y de que cada bando busca ampliar sus aliados, más que aportar argumentos.

I

La actual reforma es muy criticable en el fondo y en la forma. De hecho, salvo los profesionales de la gestión universitaria que medran con la reforma, no conozco a nadie más que se encuentre entusiasmado con la misma. Sobre todo porque el cambio pedagógico que se plantea es un mero brindis al sol. Teóricamente, el paso a sistemas pedagógicos distintos, con menos clases magistrales y más interacción es una buena idea. Pero casi nadie cree que ello se vaya a aplicar cuando seguimos con grupos de 100 alumnos. Y cuando la búsqueda de la “excelencia investigadora” ha convertido a los profesores jóvenes en meros productores de artículos para ser enviados a las revistas anglosajonas donde, se supone, competimos. Ni la carga de alumnos, ni la estructura física ni, sobre todo, el modelo de carrera profesoral es la adecuada. Si nadie del profesorado ha protestado es básicamente por dos razones: a) porque se sigue pensando que al final esto no es más que teatro político. Y que el modelo educativo seguirá con pocos cambios siendo el mismo que el actual; y b) porque para una gran mayoría de profesores con vocación investigadora la docencia seguirá constituyendo el pequeño tributo a pagar por su plaza universitaria. De hecho, al menos en mi universidad, ya se están creando mecanismos para que algunos de ellos simplemente eludan la docencia. Todo apunta a que finalmente ésta puede ser obra de profesores-docentes, socialmente demediados, difícilmente entregados a una docencia de alta calidad. Bolonia simplemente viene a reforzar una deriva clara de la Universidad más preocupada por la actividad investigadora que por la labor educativa.

Es también criticable que la conversión de las antiguas licenciaturas en la doble escala de Grados y *Masters* implique en la práctica un aumento del coste privado de estos últimos. Hay que señalar sin embargo que esto no es necesariamente aplicable a “Bolonia”. En primer lugar porque el diseño de los curriculums en la mayoría de países europeos es un esquema de 3+2, más o menos el mismo modelo universitario de carreras de cinco años tradicionales, aunque partidas en dos ciclos. Si en España se ha aprobado un esquema de grados de 4 cursos no es por exigencia comunitaria. Es por la mera presión corporativa de las Universidades españolas temerosas de que el cambio de

modelo signifique una pérdida de recursos públicos. En lugar de plantearse abiertamente la reforma en serio de la Universidad, se ha preferido, una vez más, optar por la solución corporativa y aprobar ciclos educativos más largos (y más costosos) que los de nuestros países vecinos. Tampoco el tema del coste privado de la carrera es una derivación directa de Bolonia. Es más bien el resultado de las preocupaciones presupuestarias de nuestras universidades. Y del subdesarrollo de nuestro sector público. Hay buenas razones para exigir que se amplíen los recursos dedicados a becas o se reduzca el coste de los *Masters* (aunque ahora una parte sustancial de los mismos se pagará a precio público). Una de las razones que explica el bajo rendimiento en muchas facultades se debe al gran número de alumnos que combina estudios con trabajo mercantil. Si lo que se pretende es un modelo pedagógico que implique una dedicación más intensiva al estudio, lo lógico es introducir un sistema más generoso de becas. La pretendida reforma sin recursos, tanto para el profesorado como para los estudiantes, es una de las contradicciones de la reforma y exige una demanda clara en este sentido.

II

Menos evidente me parece la asimilación de Bolonia con la privatización de la Universidad. Evidentemente me preocupa el control del capital privado sobre la misma. Simplemente que no soy capaz de captar cuál es el cambio radical que pretendidamente genera Bolonia. Desde mi punto de vista, en la Universidad hay desde hace mucho tiempo derivas preocupantes que en parte pueden considerarse privatizadoras y en parte obedecen a lógicas estamentales igualmente perversas.

En primer lugar, indicar que cuando se piensa que la privatización es la supeditación de la actividad universitaria al capital se pasa por alto que esta supeditación puede tener muchas variantes. Las cuales expresan no sólo una enorme variedad de determinaciones sino también los propios intereses contradictorios de los mismos capitalistas. Por ejemplo, algunas voces plantean simplemente que la Universidad sea un mero centro de formación profesional superior. Una pretensión inaceptable y totalmente desenfocada: ninguna institución escolar va a ser nunca un mero centro de formación ocupacional ni podrá eliminar la importancia del aprendizaje en la propia actividad laboral. El propio funcionamiento de las economías capitalistas reales exige por otra parte actividades y saberes que caen fuera de la actividad privada: gestores públicos, creación intelectual, servicios asistenciales.... Y los mismos sectores capitalistas más interesados en el desarrollo tecnológico saben que éste depende tanto de la ciencia aplicada como de la ciencia fundamental. Una ciencia que prefieren financiar con fondos públicos y que requiere aprendizajes no directamente orientados a la vida mercantil. Las formas como el capital controla el desarrollo científico son

diversas y, en muchos casos, requieren espacios de autonomía que difícilmente van a ser cuestionados.

En segundo lugar, es cierto que hay una presión creciente en las universidades por la obtención de recursos externos que pueden generar tendencias privatizadoras. Pero se trata de un proceso con muchas caras y en el que el profesorado es tan actor como víctima. De entrada recordar que el estatuto del profesor universitario permite realizar actividades remuneradas complementarias siempre que se realicen en forma de convenios y se pague un canon a la propia Universidad. En parte se trata de la continuidad de una vieja tradición de los profesionales liberales de combinar docencia universitaria con ejercicio profesional liberal (algo que también se da en buena parte de los médicos de la Seguridad Social). En parte se trata de un mecanismo por el que se obtienen fondos públicos complementarios (de Ayuntamientos, Diputaciones etc.) cuyo contenido puede oscilar entre la investigación genuina y la mera justificación académica de decisiones políticas tomadas en otras áreas. En parte se trata de verdadera transferencia de conocimiento al sector privado, por la que se reciben emolumentos. La proliferación de instituciones intermedias (Institutos Universitarios, *spin off*, etc.) puede estar indicando que estamos efectivamente ante una mayor influencia del capital. Pero responde también a la propia demanda del profesorado para reducir la parte de ingresos que dejan en la Universidad. Más que de una privatización “desde fuera” es a menudo una privatización “desde dentro” de la que participa sin rubor buena parte de la comunidad.

Además, hay que indicar que una parte de esos fondos externos se obtienen directamente de los fondos públicos de investigación (Europeos, nacionales). En teoría se trata de verdadera investigación científica, orientada por la calidad del proyecto. En la práctica es evidente que las cosas son más complejas y que se trata de un espacio donde influyen las estructuras de poder en cada disciplina académica, los juegos políticos entre facciones universitarias, el peso de escuelas de pensamiento. Sin duda ahí es donde pueden influir grandes intereses políticos y económicos (por ejemplo si se priman investigaciones sobre energía nuclear en detrimento de las energías renovables), presentes en la definición de los grandes planes de investigación europeos o nacionales. Pero esta cuestión, a todas luces crucial, no forma parte del actual programa de reforma de los estudios universitarios.

Y tampoco puede perderse de vista que a menudo el problema más grave de sumisión al capital no es sólo el de la “mercantilización” de la labor investigadora sino el del propio contenido de la ciencia normal. Pienso en mi especialidad, la economía, donde es el núcleo central del paradigma dominante el que constituye directamente una legitimación gratuita del capitalismo. Y donde gran parte del trabajo de investigación “normal” que se

exige a los profesores universitarios pasa por escribir artículos científicos que oscilan a menudo entre el esoterismo matemático y el panegírico del mercado, partiendo de hipótesis tan poco realistas, pero grupalmente asumidas, como la de la competencia perfecta o la racionalidad autista de los individuos.

Luchar contra estas derivas requiere intervenir en ámbitos muy diferentes del que se ha planteado en el debate boloñés. Requiere discutir en serio el estatuto del profesorado universitario, su función social, sus condiciones de trabajo. Requiere discutir los criterios y los procedimientos que deciden las líneas básicas de investigación y los mecanismos de control social. Sin duda requieren dar más voz en estos procesos a las organizaciones que representan intereses colectivos y reducir la de los minoritarios intereses privados. Y requieren también un debate en el seno del propio colectivo profesoral, en gran parte protagonista activo de estas derivas.

III

Llevar razón los estudiantes en cuestionar un cambio de modelo educativo. Y en exigir un debate. Pero me temo que ésta es una oportunidad que ya se ha perdido. Sus líderes optaron por una crítica estructural en el que “Bolonia era el gran proyecto privatizador” y al mismo tiempo no se sabía nada. En lugar de movilizar por los efectos concretos del modelo, y dejar abiertos los otros campos de debate, se ha optado por un planteamiento totalizador que al final se convierte en un mero elemento aglutinador de convencidos. Quizás cada generación está abocada a tropezar con los mismos errores que las anteriores. Forma parte de un aprendizaje imposible de saltarse. Pero es una pena que un tema tan necesitado de debate racional se haya convertido en un mero espantajo que ni va a paralizar las reformas en marcha (entre otras cosas porque cuando empieza a aplicarse Bolonia el próximo curso es discutible que se vaya a percibir una ruptura con el pasado) ni posiblemente va a permitir avanzar en cuestiones sustanciales como la de las becas.

Y si los contenidos son discutibles, algunas de las prácticas han sido peores. Sobre todo cuando se han practicado iniciativas vanguardistas (como la de “cerrar” una Facultad, impidiendo totalmente entradas y salidas, dos días antes de una convocatoria de huelga) y, demasiadas veces el recurso al insulto y la amenaza ha primado sobre el debate y el respeto a gente que no compartía sus puntos de vista. Se percibe demasiada preferencia por el recurso a la fuerza en lugar de la búsqueda de la legitimidad, quizás porque el plano discurso “teórico” se traduce en un autoconvencimiento de superioridad moral que no requiere contención. Una recaída en viejos vicios que han hecho más daño que otra cosa a los movimientos emancipatorios.

La incapacidad política y el radicalismo huero de este movimiento no justifican en absoluto la brutal acción policial del 18 de marzo en Barcelona. Ni legitima a unas autoridades académicas que han sido responsables de la inanidad de una reforma sin duda mal planteada. Hace mucho tiempo, si es que alguna vez lo hubo, que las universidades están dirigidas por carreristas universitarios incapaces de generar buenos debates democráticos. Hay mucho autoritarismo encubierto en las actitudes de buena parte del profesorado. A veces contrapesado por el paternalismo de algunos bienpensantes que dan por buena cualquier propuesta radical sin tamizar que provenga del alumnado. Si algo ha fallado es que nadie se ha preocupado en serio, y ahí muchos tenemos responsabilidad, en la creación de un debate franco sobre la reforma. Y en abrir canales reales de participación cuando ha resultado patente (por ejemplo en el referéndum de la Universitat de Barcelona) que la opinión anti-Bolonia está claramente extendida entre los estudiantes.

Se corre ahora el peligro de un enquistamiento de la situación y de quedar atrapados en el círculo vicioso de la lucha antirrepresiva. Un bucle sin salida que se alimenta del recurso al autoritarismo de ambas partes. En este sentido, la pacífica manifestación del día 26 en Barcelona es una buena noticia. Aunque convendría aprovecharla para generar una dinámica que saliera del techo actual: el de una reforma mal planteada y el de una impugnación sin capacidad de obtener cambios.

La educación y la política científica merecen planteamientos menos simplistas y formas de acción más variadas. Por ello uno piensa que estamos ante otra ocasión perdida. Y por ello persiste el sentimiento de malestar.

4/2009

Riesgo socializado

El nuevo plan Obama constituye la enésima aportación de capital público al mercado financiero. Es en parte una muestra del fracaso de anteriores planes de rescate a los bancos en los que ya se han gastado más de 335.000 millones de dólares. Ahora se trata de generar un mercado allí donde no existe o, mejor, de hacer que activos que ahora sólo se aceptarían de regalo acaben teniendo un precio positivo. La idea consiste, primero, en generar un fondo de activos *tóxicos* y, después, ofrecerlo a subasta a inversores privados que los podrán adquirir con créditos asegurados por el propio Gobierno. Si al final los activos no tienen valor, el estado carga con el coste. Si por el contrario los activos resultan menos tóxicos de lo esperado, los inversores devuelven el crédito y se quedan con las ganancias. Esto sí es una red de seguridad para ricos.

El diseño de esta política se basa en la presuposición (bastante más realista que los modelos escolares de competencia perfecta) que los agentes del mercado tienen información imperfecta y que toman decisiones basándose en datos no necesariamente los reales. En este caso se supone que la falta de información fidedigna sobre el valor de estos activos retrae a los potenciales inversores. Éstos pueden temer que el valor real sea cero y no están dispuestos a correr el riesgo de perder toda la inversión. El aseguramiento rompe esta limitación al trasladar el riesgo al Estado: comprando sólo pueden ganar. Se generan incentivos positivos y la compra de estos activos ayuda a limpiar los balances bancarios. Si la cosa sale bien, esos inversores harán un buen negocio sin riesgo, los bancos mejorarán su situación financiera sin coste para sus propietarios y el sector público recuperará el coste con la devolución de los créditos. Si sale mal, serán las cuentas públicas las que correrán con todos los costes de la operación, los inversores privados no tendrán que asumir costes y la banca en todo caso queda librada de esta carga financiera. En resumen, todo el riesgo para las cuentas públicas.

Esta transmisión del riesgo del sector privado al público, especialmente en cuestiones financieras, ha sido una constante del periodo neoliberal. De hecho toda la historia de la deuda externa es una historia de este tipo. En muchos países en desarrollo se impuso a los gobiernos locales que se hicieran cargo de la deuda privada. Y aún allí donde la deuda era pública toda la negociación iba encaminada a garantizar la recuperación de todo el dinero (con intereses) de los acreedores. Una situación completamente diferente de las

suspensiones de pagos mercantiles, donde la empresa con problemas financieros obtiene una rebaja sustancial de sus deudas (el riesgo se reparte entre acreedores y deudores). Lo que antes se consideraba una expresión del imperialismo dominante en las relaciones entre países ahora se advierte como un rasgo más sistémico del capitalismo neoliberal. La sistemática traslación del riesgo financiero al sector público apelando a las urgencias de las situaciones de emergencia y al doble tabú de que hay que impedir a toda costa la quiebra bancaria y de que es inadecuada la nacionalización de la banca (al menos como modelo estable: otra cosa son las nacionalizaciones de emergencia como las que se están dando a diario). Al menos, tenemos razones suficientes para erradicar el argumento de que el origen de los beneficios es el riesgo, especialmente en el caso del riesgo financiero.

La inequidad es flagrante cuando se compara la protección enorme de estos intereses financieros con la que están corriendo las pensiones privadas a las que se ha forzado a participar a buena parte de las clases medias asalariadas. Después de años de propaganda masiva y de políticas fiscales en pro de los planes de pensiones privados, después de años de escuchar la quiebra segura de los sistemas de pensiones públicas de reparto, la Unión Europea acaba de reconocer que lo que realmente está en peligro son los planes privados. Ya hay mucha gente cuyo banco le ha informado de una caída sustancial del valor de su plan de pensiones, como resultado del carácter especulativo de una gestora que prometía alta rentabilidad. Y es que si alguien actúa con información deficiente en el mercado es sin duda el “inversor” de un plan de pensiones privado. Lo que nos da nuevas razones para defender los sistemas de reparto, que no sólo son más seguros sino que son relativamente fáciles de adaptar por medio de decisiones políticas relativamente sencillas.

Esta traslación de riesgo al sector público tiene dos efectos netos evidentes. A corto plazo, aumenta el endeudamiento público, lo que puede ir en detrimento de otras fórmulas de endeudamiento más capaces de generar empleo, o incluso puede justificar políticas de recorte del gasto público similares a las de muchos países en desarrollo. A largo plazo, este endeudamiento se convierte en una obligación de pago del conjunto de la ciudadanía hacia los tenedores de títulos de la deuda. Es bastante posible que estos tenedores acaben siendo los mismos bancos que han recibido ayudas: en tiempos de gran incertidumbre siempre parecerá más segura la inversión en títulos de Estados solventes que el riesgo de un crédito privado. El plan de salvamento que libera a los bancos de sus productos tóxicos es, al mismo tiempo, una vía de servidumbre permanente de la ciudadanía respecto al sector financiero. No sólo les libera de sus responsabilidades pasadas, les concede ingresos garantizados para el futuro. Como señala acertadamente Michel Hudson en la última entrega de *Sin permiso* (“El verdadero escándalo de AIG”) el tema de los pagos millonarios a los altos directivos de la aseguradora es sólo el

chocolate del loro de una transferencia escandalosa de rentas a un sector financiero depredador.

En este sentido el plan Obama es ciertamente peculiar. A diferencia de la mayoría de países donde la intervención corre a cargo bien del erario público directamente o en forma de avales públicos, bien de los fondos de garantía establecidos por el sector público desde hace años (como el Fondo de Garantía de Depósitos español), en el caso de Estados Unidos gran parte del dinero sale de la emisión de dólares por parte de la Reserva Federal. Para cualquier otro país esto puede ser imposible, pues nadie acepta divisas de países que están emitiendo dinero a lo loco. Para EE.UU., en cambio, el hecho de que el dólar sea la moneda internacional y que todo el mundo este dispuesto a aceptar dólares estadounidenses, le concede un privilegio que le dota de una importante capacidad de extender el riesgo hacia los tenedores de dólares del exterior (mayoritariamente los países del Este asiático). A corto plazo incluso es posible que esta emisión masiva se traduzca en una caída del tipo de cambio del dólar respecto a otras monedas que actúe de facto como una política proteccionista estadounidense. El imperio americano está tocado pero tiene aún muchos mecanismos de sostén. Especialmente si se compara con una Europa dominada por una ortodoxia monetarista y una incapacidad de acción colectiva que ya está generando una situación de verdadero drama. Especialmente es su desgraciada “frontera” oriental, la de aquellos países que en pocos años han pasado del despotismo burocrático al despotismo del mercado neoliberal.

Si queremos evitar que la factura que nos pasan los ricos acabe por ahogarnos es necesario más que nunca generar voces, propuestas y movilizaciones serias que, cuando menos, generen un reparto más justo del riesgo.

Seat como símbolo

Durante unos días el gran tema mediático de la crisis ha sido el referéndum de los trabajadores de Seat. Se apelaba a la responsabilidad sindical como un paso necesario para salir de la crisis. Y ya se sabe que lo que los *media* defienden como responsabilidad suele ser siempre la aceptación de rebajas salariales o peores condiciones salariales. Una responsabilidad que casi nunca se pide a los gestores de las grandes empresas privadas, a las que nunca se las valora por su capacidad de generar buenas condiciones de vida entre sus empleados.

Tal como se ha planteado la situación, parecía que la suerte de Seat, y con ella la de buena parte de la industria auxiliar que se mueve a su alrededor, dependía de que los trabajadores aceptaran el enésimo apretón de cinturón.

Algo que resulta curioso si nos atenemos a la información sobre costes totales y laborales que manejan los delegados de CC.OO. y sobre las que baso esta nota. De acuerdo con esa información, el coste medio de un empleado en Seat es un 11,3% más bajo que el del conjunto del grupo Volkswagen, y sólo un 6% más elevado que el de su fábrica “barata” Skoda. Cuando se contemplan los costes salariales unitarios (salarios por unidad de producto) la valoración es aún más favorable a Seat, ya que representan solo un 8,3% del coste del vehículo, frente al 12,5% del conjunto de Volkswagen y el 12,8% de Skoda (aunque los salarios son inferiores, como vende vehículos más baratos la repercusión de los salarios es mayor). Es cierto que en una industria con tantos procesos externalizados como la del automóvil los costes pueden fluctuar, pero no parece que a la luz de estos datos se pueda imputar a los costes salariales la responsabilidad de los problemas de Seat. Ni tampoco resulta evidente que el ahorro salarial aceptado por los trabajadores explique un cambio sustancial de costes. El ahorro que se obtiene con esta concesión salarial (unos 3 millones de Euros anuales) sería fácilmente alcanzable, y socialmente más soportable, con una rebaja en los *bonus* que reciben los altos directivos. Pero éste es siempre un tema intocable.

Ni la nueva concesión laboral ni las ayudas que está movilizando el sector público en la nueva apuesta por el Q3 garantizan el futuro de Seat y su industria auxiliar. De hecho la historia de la empresa ha estado sujeta en los últimos veinte años a los intereses de Volkswagen, primando no sólo consideraciones financieras sino también intereses de empleo en Alemania: cambios de la gama de modelos, de las líneas de comercialización han sido la otra cara de la presión por la flexibilidad, los recortes de salarios y las ayudas públicas. Y no parece que de ello hayan aprendido nada ni los responsables nacionales y autonómicos de política industrial ni algunos dirigentes sindicales. Quizás porque el efecto simbólico que tiene aún Seat en el imaginario colectivo de nuestros líderes es tan grande que éstos siguen pensando que apostar a toda costa por el fabricante de coches es lo único sensato.

La batalla de Seat es un símbolo claro de nuestras respuestas colectivas. Es ante todo el primer combate de la crisis donde se ha planteado y ha triunfado la idea que hay que seguir por la vía de renunciar a derechos a cambio de que sigan viniendo las beneficiosas multinacionales. Después del robo financiero viene el nuevo chantaje. Es también un símbolo de la incapacidad de alterar, al menos a corto plazo, el modelo productivo. Cuando éste ha mostrado su caducidad, cuando hace años que los mismos sindicatos propugnaban un cambio de modelo productivo (con argumentos bien elaborados, como se puede comprobar con la lectura de los Cuadernos de Gaceta Sindical fácilmente accesibles en la web de Comisiones Obreras) llega la crisis y lo único que moviliza es la defensa de lo de siempre. Quizás porque no existe

una verdadera propuesta alternativa y también porque lo inmediato, la destrucción masiva de empleo, impide la respuesta a largo plazo (no sólo en el caso del auto sino también en el de la construcción). Y, por último, representa un símbolo de cómo abordarán los medios de comunicación los grandes debates socio-económicos: silenciando las opiniones disidentes (como les ha ocurrido en este caso a los sindicalistas de CC.OO. y CGT, como sucede a diario con las fundamentadas opiniones de los antinucleares).

Más allá de una congelación salarial, Seat expresa la congelación de la propuesta crítica. Es también una enseñanza para tratar de buscar alternativas, y maneras de defenderlas, que impidan que la crisis del neoliberalismo sea en verdad un derribo sobre nuestras cabezas.

4/2009

Crisis y corrupción en EADS

Pere Ortega

Desde su nacimiento, en julio del 2000, European Aeronautic Defence and Space Company (EADS) se convirtió en una de las joyas más preciadas de la UE. EADS nacía bajo el impulso de sus dos estados líderes, Francia y Alemania, y España como invitado menor. La intención era convertir EADS en una gran empresa aeronáutica mundial y un polo para el desarrollo de nuevas tecnologías en Europa. EADS se formó tras fusión de la alemana Daimler Aerospace, la francesa Aerospatiale propiedad de Lagardère, y por parte de España de Construcciones Aeronáuticas, SA (CASA), propiedad del Estado, quien a cambio obtuvo el control del 5,5% de las acciones del nuevo consorcio.

EADS, a través de su filial Airbus, pretendía competir en el mercado de aviones de transporte civil con la estadounidense Boeing, hasta entonces líder indiscutible mundial. La gran apuesta de Airbus, era la fabricación de un gigante del transporte civil, un avión de grandes dimensiones, el A-380 de dos pisos con capacidad para 850 personas y diseñado para albergar algunos lujos como cabinas individuales, dobles, sauna, sala de juego, etc. Pero, a la vez, EADS era, como su nombre indica, un potente consorcio militar, hoy situado en sexto lugar en el ranking mundial de fabricantes de armamentos, con diversas divisiones de producción: de aviones de combate (Eurofighter); de transporte militar (A400M); cohetes espaciales (Ariane); satélites (Galileo) con doble función, ofrecer información civil pero también militar; helicópteros de combate (Tigre) que fabrica la filial Eurocopter; y finalmente diversos sistemas de misiles que fabrica otra firma del grupo, MBDA.

Las cosas en EADS se empezaron a torcer cuando en junio de 2006 surgió el anuncio de que Airbus retrasaba la entrega de su avión estrella, el A-380, debido a problemas tecnológicos, y anunciaba la duplicación de su coste. Esto provocó que las acciones de la compañía se hundieran un 27% en bolsa. Anuncio acompañado de un escándalo mayúsculo, puesto que tan sólo tres meses antes su copresidente, el francés Noël Forgeard, aprovechando la información privilegiada de que disponía vendió sus *stock-options* y se embolsó 3,8 millones de euros. Lo mismo hicieron otros directivos y los principales accionistas privados, el fabricante de armas francés Arnaud Lagardère y el socio alemán Daimler, que se desprendieron de la mitad de sus acciones. En su conjunto, los diez millones de títulos vendidos aportaron unos 90 millones de beneficios a todos los implicados, mientras el resto de accionistas y los estados francés y español veían asombrados como el capital de sus acciones retrocedía. Ante el escándalo, se despidió al personal de

dirección de EADS, pero como eran poseedores de contratos blindados recibieron fuertes indemnizaciones. Forgeard se embolsó otros 8,5 millones de euros. En el otro extremo de la cadena de producción, los 110.000 trabajadores de sus factorías veían como se reestructuraba EADS y se dejaba sin trabajo a 10.000 personas en toda Europa.

Como era de esperar, las cosas no acabaron ahí. En octubre de 2007, la Autoridad de Mercados Financieros francesa ponía en manos de la fiscalía una denuncia por delito de “iniciación” (información privilegiada) contra un total de veinte directivos y accionistas, entre ellos Legardère. El caso hoy sigue en los juzgados a la espera de una resolución. Pero el culebrón continuó. Poco más tarde, en noviembre del 2007, apareció otro obstáculo en el camino de EADS: la dirección decidió retrasar la fabricación del avión de transporte militar A400M. El ensamblaje del cual se lleva a cabo en Sevilla y buena parte de sus componentes se fabrican en diversas empresas españolas. El coste estimado del retraso fue evaluado por la dirección de EADS en 1.200 millones de euros y sumía a la filial española EADS-CASA en la incertidumbre sobre su futuro. Por último, a finales de febrero pasado, surgió el anuncio de la dirección de EADS de integrar el A400M, hasta ahora en manos de EADS-CASA, en Airbus Military, lo cual se llevó a cabo con la oposición del Director del sector militar EADS-CASA y del gobierno español, ante el temor de perder el control sobre este modelo y de un posible desplazamiento del ensamblaje fuera de nuestras fronteras.

Además, Airbus siempre ha gozado de ayudas millonarias por parte de los estados. Así, fue denunciada ante la OMC a finales de 2006 por su rival estadounidense Boeing, por recibir ayudas por un importe de 14.300 millones de euros de la UE y de los gobiernos europeos implicados en la fabricación de sus aviones. A su vez, la dirección de Airbus respondió denunciando ante la misma instancia que el gobierno de EE.UU. había entregado a Boeing subsidios por un importe de 18.600 millones de euros. Es decir, estamos hablando de un consorcio empresarial, EADS y todas sus filiales (Airbus, Eurocopter, Astrium, MBDA...) que se presentaba como el gran proyecto motor en desarrollo de I+D en nuevas tecnologías que beneficiaría a la industria civil europea. Y ahora, en lugar de aportar desarrollo y bienestar, se ahogan en medio de corrupción e incertidumbre.

La crisis de EADS, además de la falta de control, sueños de grandeza y corrupción, está afectada por otras dos cuestiones. El problema del cambio climático y la producción de armamentos. Respecto a la cuestión ecológica que plantean las emisiones de bióxido de carbono (CO₂) a la atmósfera por parte del transporte aéreo. El superavión A380 para 850 pasajeros, según la propia empresa, parecía en parte solucionado, pues pese a su enorme capacidad y peso, estaba dotado de una tecnología que le permitía ahorrar

combustible. Esto posibilitaba apostar por incrementar los vuelos de transporte aéreo. Pero el problema es el mismo del automóvil que también apuesta por motores de menor consumo. ¿Acaso se puede universalizar el transporte aéreo de viajeros sin acelerar el cambio climático?

Hoy el transporte aéreo contabiliza unos 1.700 millones de pasajeros al año. Y de estos, tan sólo unos 300 millones son por razones de trabajo, las elites políticas, empresariales y profesionales que se desplazan en avión. El resto de 1.400 millones de pasajeros viaja para hacer turismo ¿Es razonable continuar con el uso intensivo del avión para la expansión del turismo?

La expansión del uso del transporte aéreo de manera intensiva provoca un grave deterioro del medio ambiente. Y produce la misma congestión que el automóvil como transporte privado. De una parte, por el continuo crecimiento de las infraestructuras de los aeropuertos, más pistas y más accesos de transporte de los usuarios para llegar a ellos. Después está el problema del combustible, una energía fósil no renovable, un derivado del petróleo, de mayor calidad, el queroseno, especialmente refinado para la combustión de los motores de avión. Y que como todos los hidrocarburos emite CO₂, una de las causas del efecto invernadero que nos ha conducido al actual cambio climático.

A la cuestión ecológica se añade la de la fabricación de armas. EADS facturó en esta actividad 7.572 millones de euros en el año 2006, de los cuales 1.020 correspondieron a la parte española de EADS-CASA. En este punto, quiero recordar que, para que un producto forme parte de la economía real, éste debe circular en el mercado, pues sólo así adquirirá un valor social. Y las armas, por mucho que se quiera demostrar no forman parte de la economía productiva, pues ni circulan por el mercado, ni aportan valor añadido en I+D al sector civil, sino al contrario, destruyen I+D, pues no más allá del 10% revertirá en el sector civil. Con lo cual, el 90% restante son costes de oportunidad perdidos. En el caso español, el Estado ha entregado desde 1997 17.400 millones de € en concepto de I+D a las industrias militares, y buena parte han ido a parar a EADS-CASA, con quien se mantienen contratos de armas desde esa misma fecha por 20.000 millones de €. Ante semejante dispendio hay que preguntarse: ¿las armas son bienes productivos? Mi respuesta es negativa. Las armas al no entrar en los circuitos de intercambio no tienen ningún valor social. Y al ser adquiridas por el estado, sin competencia, generan clientelismo, endeudamiento e inflación.

La crisis de EADS debería ser una oportunidad para repensar la producción militar y pasar al sector realmente productivo, el civil. Así como para reordenar y ajustar el transporte aéreo, empezando por los precios, el queroseno no está gravado por impuestos. Esa sería una fórmula para disuadir

del uso del avión en viajes superfluos.

4/2009

Josep Torrell

En la España de mediados de los años setenta, Ulrike Marie Meinhof —en gran parte debido a un par de libros traducidos por Manuel Sacristán Luzón— se convirtió en una especie de alegoría de la desesperación revolucionaria. Ulrike Meinhof nació en 1934 y tenía 23 cuando participó en las Marchas de Pascua, que era el primer movimiento pacifista de los años cincuenta, y posteriormente contra las leyes de emergencia. Afiliada al partido comunista (1958-1964), fue miembro activo de Federación de Estudiantes Socialistas (SDS). Profesionalmente fue periodista y jefe de redacción de la revista *Konkret* (1959-1969) y tuvo fama como periodista radiofónica y televisiva.

La evolución antidemocrática del gobierno alemán, su sujeción a los dictados del amo estadounidense y le preocupante pasividad de las clases trabajadoras inquietaron primero a Ulrike y la indignaron después. La matanza de un manifestante contra el Sha de Irán (1967) y el atentado contra el líder estudiantil Rudi Dutschke (1968) constituyeron puntos de no retorno en su reflexión política. Desde su columna de *Konkret*, defendió a Andreas Baader cuando incendió unos grandes almacenes y luego dio el paso a la guerrilla urbana, al participar en la fundación de la Fracción del Ejército Rojo (conocida policialmente como banda Baader-Meinhof). Era lo paradójico de su trayectoria —una dirigente pacifista que acaba fundando un grupo armado— lo que convertía su caso en motivo para pensar. Por utilizar un término de Eric Hobsbawm, que hizo fortuna por aquel entonces, era una revolucionaria sin revolución. Sacristán invocó el término de desesperado.

Cada vez más consciente de que la estrategia armada no llevaba a ningún lado deseable, pero también que decirlo era una traición para quienes pensaban lo contrario, Ulrike se quitó la vida el 9 de mayo de 1976, aniversario de la derrota de las tropas nazis. Treinta años más tarde, reflexionar de nuevo sobre Ulrike Meinhof podría ser un modo de pensar que es la izquierda y qué podemos hacer en una situación que no deja de tener inquietantes similitudes con la Alemania de entonces. Hacer una película podía servir para dibujar —para las generaciones que han venido después— la situación de bloqueo y las alternativas que barajaba la izquierda juvenil de aquellos años: para tratar sencillamente de desvelar aquella alegoría.

Es cierto que los cineastas de aquella generación y posteriores intentaron acercarse a la experiencia de este grupo armado. Margarete von Trotta le dedicó dos de sus mejores películas: *El segundo despertar de Krista Klages* (1977) y, sobre todo, *Las hermanas alemanas* (1981). Reinhard Hauff

hizó también *Stammheim: el proceso* (1986), editada ahora en DVD. Entre las películas recientes cabe destacar *El silencio tras el disparo* (1999) de Volker Schöndorff (sobre la tragedia de una arrepentida entre las dos estados alemanes) y *Die Innere Sicherheit* (2000) de Christian Petzold (sobre los hijos que hubieron de sufrir la trayectoria fugitiva de sus padres). También el cine documental se ha ocupado del tema, con la sobria y lúcida *Ulrike Marie Meinhof. Lettre à la fille* (1994) de Timoun Koulmasis. Cada una de ellas trataba, a su manera, de acercarse a las razones subyacentes a la decisión de pasar a la lucha armada.

Aunque la película *RAF: Facción del Ejército Rojo* (Der Baader-Meinhof Komplex, 2008) de Uli Edel, que acaba de estrenarse, no parece ir por esos derroteros. Es cierto, por supuesto, que resulta impactante la reconstrucción de la época y las escenas que son el caldo de cultivo del grupo, desde el asesinato a sangre fría de Benny Ohnesorg en la manifestación ante el régimen del Sha hasta el atentado contra Rudi Dutschke. Son rápidas, pero convincentes, las noticias que llegan de todo el mundo. Pero esa presentación se va deshinchando poco a poco a medida que se adentra en la historia del grupo y su planteamiento de la guerrilla urbana contra el imperialismo.

Meinhof tenía diez años más que sus compañeros, y tenía también más experiencia, sobre todo política, pero también muchos contactos, en particular entre la intelectualidad. Sin embargo, nada se dice en la película ni de que había sido pacifista ni de su simpatía entre sectores de los intelectuales. Así, por ejemplo, se pasa por alto que fue detenida no en cualquier piso franco sino en casa de un intelectual (que la entregó a la policía). Podría parecer anecdótico, pero no lo es: es el retrato del personaje el que resulta falseado y, por lo tanto, dañado.

También causa cierta sorpresa ver la fragilidad y la timidez de Ulrike Meinhof en relación con los demás miembros del grupo, cuando la imagen que ella daba por televisión —y son imágenes que puede haber visto cualquiera— es diametralmente opuesta: elocuencia argumental, claridad de propuestas, réplicas fulminantes y capacidad de convicción. Es muy posible que en la vida privada fuera algo diferente, pero esto no quiere decir que hiciera cosas tan social-ridículas (como leer la carta al Sha a un grupo que más parecen potentados que gente de *Konkret*), o que ocupara un segundo término dentro del grupo. El personaje real de Ulrike se desdibuja.

El retrato que se ofrece de Andreas Baader y Gudrun Ensslin es igualmente discutible. Posiblemente es acertado ver cierto personalismo en Baader, pero cuesta bastante de creer que jugasen con las pistolas como si nada (por ejemplo, en la carrera nocturna disparando en la carretera). Probablemente ese juego sólo es posible para quien no ha tenido un arma cargada en sus

manos. Además hay algo importante que se pierde: el politicismo del tiempo; el hablar siempre en lenguaje político (incluso de las cosas más íntimas). Gudrun Esslin parece responder a este modelo, pero no los demás. Parece que estén allí para jugar un poco, o simplemente para cubrir el repertorio.

La reflexión sobre lo que hacían se esfuma en el aire. Cómo se teoriza la guerrilla urbana, cómo se fijan sus objetivos, cómo se evalúa la pasividad de las masas, etcétera, sencillamente no cuentan al hacer el guión de la película. Las divergencias en prisión —que existieron— podían haberse resuelto mediante una discusión entre ellos (las reuniones están, pero no la discusión), pero se optó por diseminar las frases relevantes a lo largo de muchas secuencias (sin relación dramática entre sí).

Lo mismo sucede con la muerte. Salvo Holger Meins —probablemente porque había el abogado presente— se omiten las muertes de los demás. Que Ulrike Meinhof se suicidara está comprobado, pero la versión que Baader, Esslin y Raspe se suicidaran deja mucho que desear. Es la frase final la que los da por suicidados a todos. Pero es la frase más etérea (y tramposa) de cuantas suenan en la película. Porque el espectador —a quien se remite ese “¿qué os habíais creído que eran?”— en realidad no puede pensar nada, porque no se le han dado los elementos de juicio para pensar cabalmente. Es una frase que permite repasar la película, pero al mismo tiempo es la garantía de que el espectador no va a encontrar más que lo que él mismo haya metido (y nunca los guionistas).

¿Por qué, ahora, ellos? Tal vez buscar la alegoría de esa activista por la paz metida a colocar bombas en las bases norteamericanas sea sólo un sueño de mi generación, el sueño de quienes un día de otoño de 1977 sentimos el frío en el corazón ante el suicidio de estado de los tres prisioneros. Tal vez esta historia vieja, del siglo pasado, sirva sólo para vender más entradas de cine (sobre todo si tiene cierta proporción de aventuras). Tal vez.

Si no fuera porque, desatendida la motivación política de los personajes, sólo queda su enfrentamiento directo con la policía. Terroristas contra serenos, con algunas frases —sobre la guerra cuando no hay guerra— que pertenecen más a este siglo que al pasado. Ahí está todo. En este duelo, por lo demás, gana la policía. En concreto, el presidente de la oficina criminal federal, Horst Herold (bien interpretado por Bruno Ganz), que fue el encargado de eliminar la Fracción del Ejército Rojo. A la nulidad con que se presenta el pensamiento político en torno a la guerrilla urbana se contraponen con todo lujo de detalles el discurso de la represión y el aniquilamiento: un Herold que, mientras saborea una sopa de bogavante, hace cábalas sobre cómo acabar con su enemigo. Es decir, la imagen del estado policial.

Probablemente el único héroe positivo que concibe el mercado sea éste. Un ángel exterminador de las esperanzas de cambio. Pero la Fracción del Ejército Rojo no se merecía ese escarnio desazonador, por mucho que uno disienta del camino que emprendieron.

4/2009

Marcel Coderch y Núria Almiron

El espejismo nuclear. Por qué la energía nuclear no es la solución, sino parte del problema

Los Libros del Lince, Barcelona, 2008, 231 pags.

Este es un libro muy armónico, con un solista principal y diversas intervenciones complementarias que embellecen la sinfonía y la convierten en una obra ejemplar. El tema melódico resulta conocido y familiar: “¿Nucleares? -¡No, gracias!”. Pero en asuntos políticos es mala cosa quedarse en las consignas. Conviene cargarlas de razones. Y eso es lo que, en mi opinión, hacen de manera modélica Marcel Coderch (ingeniero de telecomunicaciones por la UPC y doctor en ingeniería eléctrica e informática por el Instituto Tecnológico de Massachusetts —MIT—) y Núria Almiron, licenciada en ciencias de la comunicación y ciencias políticas por la UAB y doctora en periodismo.

Desde luego, cuando se trata de asuntos complicados sobre los que son muchos quienes hablan sin saber, y los buenos modos más bien brillan por su ausencia, conviene recomendar los discursos cargados de racionalidad y presentados con cortesía. Porque no es buena cosa anteponer las consideraciones estéticas o sentimentales al rigor y la racionalidad. Así que, aun cuando resulten ineludibles algunas dosis de retórica, conviene recalcar que, en la medida de lo posible, la defensa de unas u otras opciones sociotécnicas debiera apoyarse en argumentos veraces y exponerse con talante amable. Por eso es muy de agradecer que este libro presente los asuntos con rigor y claridad, atendiendo a las razones de los oponentes, así como a sus motivaciones y al contexto que las envuelve.

Uno de los asuntos mejor esclarecidos en este libro concierne a un asunto importante: cuánto cuesta y cuánto vale la energía atómica. Las conclusiones son contundentes: “El empleo civil de / la energía nuclear / ... que fue diseñado esencialmente con fines propagandísticos en ningún momento atendió a consideraciones de viabilidad técnica ni económica” (66). “No hay ... pruebas del hipotético bajo coste de la producción de energía nuclear” (71). Y no es la única pega de la industria nuclear: “los cuatro problemas que la han acuciado desde sus inicios / son /: la seguridad, los costes, los residuos y la proliferación. Sólo intereses ideológicos, privados o políticos y la perspectiva de una situación energética desesperada podrían tratar de resucitar a un monstruo moribundo tan inseguro, carente de rentabilidad, extremadamente contaminante y auspiciador de una proliferación armamentística tan letal.” (129). Pero previamente se han presentado de manera cuidadosa las pruebas

e indicios que sustentan estos juicios finales.

El corolario de la lección es muy de recibo: “Permitir que el público crea que estamos a las puertas de obtener, con cualquiera de estas nuevas quimeras / fusión nuclear, alquimia con los residuos, nuevos reactores nucleares seguros o el ubicuo hidrógeno, en lugar de desarrollar las energías renovables /, una generación de energía limpia, barata e ilimitada es tanto una falsedad como una enorme irresponsabilidad, porque perjudica sobremanera la tan necesaria imagen de la energía como un bien valioso que en modo alguno debemos ni podemos despilfarrar” (204). “Fingir que podemos continuar creciendo exponencialmente en un planeta con recursos finitos es un absurdo, pero no ver, o no querer ver, este absurdo, es una estupidez.” (207). “Lo que necesitamos no son nuevos sistemas energéticos revolucionarios, sino una reducción significativa de nuestros consumos” (212). “Vivir hoy despilfarrando nuestro capital energético confiando en que mañana nos tocará la lotería porque hemos comprado algunos décimos es, además de irracional, tremendamente injusto para con nuestros hijos y las generaciones que han de seguirlos.” (215).

Alfons Barceló
12/3/2009

Rafael Poch-de-Feliu

La actualidad de China. Un mundo en crisis, una sociedad en gestación

Crítica, Barcelona, 2009, 673 pags.

El autor nos ha dado ya un excelente libro sobre el hundimiento de la Unión Soviética. En *La actualidad de China* nos proporciona la mejor aproximación posible a esta sociedad, su cultura y su política. Un libro apasionante que arrastra al lector como una novela, que deshace prejuicios y examina en profundidad la China del presente. Poch-de-Feliu ha vivido varios años en China como corresponsal de *La Vanguardia*, pero su escritura está muy por encima de lo que normalmente se entiende por periodismo pues el libro que comentamos es ciencia social en acto. Sobre todos sus valores, un magnífico punto de vista del escritor, agudamente consciente de los problemas de nuestro tiempo. Un libro indispensable que recomendamos encarecidamente.

Juan-Ramón Capella
4/2009

Vasili Grossman

Todo fluye

Galaxia Gutenberg/Círculo de Lectores, Barcelona, 2008, 288 pags.

Tras la impresionante *Vida y destino*, nos llega ahora el último libro escrito por Grossman, Una visión descarnada de lo que significó el stalinismo. Aunque la reflexión pueda parecer la de un liberal, la dureza y la verdad de lo relatado no dejan lugar a dudas. La experiencia soviética tuvo mucho de desastre. El que ahora nos sigue obligando a hablar en voz baja de socialismo y alternativas al capitalismo. En todo caso una reflexión necesaria para entender qué formas de actuación no hay que volver a repetir. Para pensar sobre qué ideas y proyectos hay que pensar, luchar y construir una sociedad verdaderamente deseable.

Albert Recio Andreu
4/2009

Isaac Rosa

El país del miedo

Seix Barral, Barcelona, 2008, 320 pags.

La nueva entrega de Isaac Rosa es una aguda reflexión sobre los mecanismos que generan el miedo individual, privado, que atenaza a buena parte de la sociedad, De sus mecanismos de propagación. Un miedo que está detrás de muchos comportamientos individualistas (el coche y el hogar autosuficiente como espacios de seguridad). De muchos de los comportamientos xenófobos, racistas, autoritarios que florecen en nuestra sociedad. De muchos de los movimientos sociales reactivos que observamos en nuestros barrios y pueblos. Miedos que debemos conocer, neutralizar y transformar para generar procesos sociales que tiendan a la solidaridad, la participación y la colectividad. Buena lectura para las vacaciones de Pascua.

Albert Recio Andreu
4/2009

Foro de webs

Proceso de Bolonia⁴

<http://movimiento.noabolonia.org/>

Web estudiantil que recoge información sobre las movilizaciones en curso en todo el territorio español.

<http://assembleapdipas.wordpress.com>

Web de la Asamblea PAS y PDI de las Universidades Catalanas. Incluye un Manifiesto contra el desmantelamiento de la universidad pública y un comunicado a raíz de los hechos del 18 de marzo.

<http://www.descweb.org/?q=es/taxonomy/term/3>

Comunicado de Prensa de La Comisión de Defensa de los Derechos de la Persona del Colegio de Abogados de Barcelona, junto con la Federación de Vecinos de Barcelona (FAVB), El Observatorio de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC), la Asociación Catalana de Defensa de los Derechos Humanos (ACDDH), el Observatorio del Sistema Penal y los Derechos humanos de la Universidad de Barcelona (OSPDH, de denuncia por la actuación de la policía en el desalojo de la sede central de la Universidad de Barcelona.

4/2009